



Separata SERVINDI N° 13

Editado por Servicios en Comunicación Intercultural Servindi – julio de 2016.
Sede institucional: Calle Guillermo Perata 185, Urb. Chama, Surco, Lima – Perú
Sitio web: www.servindi.org Correo institucional: servindi@gmail.com
Teléfono: 51-1-2720290

Presentación

La presente separata contiene:

- El informe Perú incorporado en el anuario “El Mundo Indígena 2016” que edita el Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA, por su sigla en inglés) y que proporciona una apretada síntesis del acontecer relacionado a los pueblos y comunidades de enero a diciembre de 2015.
- Fragmentos del libro “La Comunicación antes de Colón” editado por un equipo liderado por el maestro boliviano Luis Ramiro Beltrán, a quién rendimos homenaje por su aporte a la comprensión de la comunicación indígena.
- Aspectos conceptuales básicos sobre el conflicto y la conflictividad socioambiental definidos por la Defensoría del Pueblo.
- Un artículo informativo sobre algunas iniciativas referidas al desarrollo sostenible de la Amazonía y que explica nociones como DCI, REDD+ y REDD+ Indígena Amazónica (RIA).

Hemos ilustrado esta edición con dibujos de Carlos Tovar, el popular “Carlín”, cuyas Carlincaturas son insuperables para expresar con humor la esencia del acontecer político y que son publicadas diariamente por el prestigioso diario La República, uno de los medios nacionales más importante del país por su vocación democrática.



Mundo Indígena 2016. Informe Perú

De manera oficial, según el Censo 2007, existen más de 4 millones de personas indígenas en el Perú: 83,11% quechuas, 10,92% aimaras, 1,67% asháninkas y 4,31% miembros de pueblos indígenas amazónicos. 3 millones 360,331 personas aprendieron a hablar en la lengua quechua y 443,248 lo hicieron en la lengua aymara, lenguas originarias predominantes en el área costa-andes.

El Censo de Comunidades Indígenas realizado en 2007 en 1786 comunidades amazónicas recogió información sobre 51 de un total de 60 etnias existentes en la selva. No se empadronó a nueve de ellas “debido a que algunas etnias ya no conforman comunidades al ser absorbidas por otros pueblos, además de existir otras que, por su situación de aislamiento, son de muy difícil acceso”.

Según el Ministerio de Cultura existen 55 pueblos indígenas y 47 lenguas indígenas u originarias en el país. De otro lado, el 21 por ciento del territorio nacional está cubierto por concesiones mineras, y estas se superponen al 47,8 por ciento del territorio de las comunidades campesinas. La Amazonía peruana está cubierta en un 75 por ciento por concesiones de hidrocarburos.

La superposición de derechos sobre los territorios comunales, la enorme presión de las industrias extractivas, el desorden territorial y la falta de implementación eficaz de la consulta previa, agudizan los conflictos territoriales y socio-ambientales en el Perú, país que ha suscrito y ratificado el Convenio sobre Pueblos Indígenas núm. 169 de la OIT y votó a favor de la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas en 2007.

Contexto nacional

Los paquetazos normativos

Algo que caracterizó el gobierno de Ollanta Humala (2011-2016) fue la expedición de los denominados “paquetazos normativos”, una especie de legislación especial confusa y diversa que con el argumento de promover la inversión aborda una serie muy variada de temas: administrativos, tributarios, ambientales, etc. que vulneran una serie de derechos territoriales y debilitan la vigilancia y la institucionalidad ambiental¹. Los paquetazos se emitieron a partir de 2013 y continuaron en 2015 con la intención de destrabar la inversión pública y privada, es decir, simplificar y eliminar cualquier obstáculo que impida el crecimiento económico pero conllevan la amenaza de dejar en la indefensión el ambiente y los territorios de los pueblos indígenas y permitir el despojo.



El drama de la titulación persiste en contra de las comunidades campesinas y nativas quienes tienen costosos y engorrosos trámites muy difíciles de superar.

En ese marco se emitió el DS 001-2015-PCM cuyo aspecto más lesivo es que simplifica los plazos en los procedimientos para obtener una concesión minera. Con esta norma las empresas “podrían cooptar, como algunas ya lo vienen haciendo, a los directivos de una comunidad con el fin de que ellos suscriban los acuerdos sobre las tierras de la comunidad sin información clara y transparente y pasando por encima de la Asamblea Comunal”².

Otra norma es la Ley 30327, Ley de Promoción de las Inversiones para el Crecimiento Económico y el Desarrollo Sostenible, o “cuarto paquetazo”, que establece el uso compartido de las líneas de base para elaborar nuevos instrumentos de gestión ambiental, aprueba el otorgamiento de servidumbre de terrenos eriazos y la entrega provisional de dichos terrenos a favor de proyectos de gran envergadura. Además, define un solo procedimiento administrativo para la solicitud del Certificado Ambiental Global de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y la autorización de títulos habilitantes para recursos hídricos y forestales.

De esta manera el gobierno continúa imponiendo una lógica de “simplificación administrativa” en favor de la inversión, obvia derechos como la consulta previa e incluso vulnera derechos a la propiedad, a la posesión y a la autonomía comunal para el uso de la tierra. También criminaliza el uso del territorio de los pueblos indígenas al incorporar la figura de usurpación agravada cuando ocurre sobre “derechos de vía o localización de área otorgados para proyectos de inversión”.

Numerosas organizaciones civiles han manifestado su rechazo a los paquetazos normativos y a la Ley N° 30327 por poner en riesgo las tierras y territorios indígenas y de poseedores, por debilitar los procesos para una adecuada revisión de los estudios de impacto ambiental. La norma es ambigua porque contiene disposiciones que pondrían en peligro la propiedad de territorios de comunidades campesinas y nativas para favorecer la ejecución de proyectos de gran envergadura. Alertan que en lo referido a la servidumbre, los permisos para el derecho de vía y la expropiación de bienes inmuebles para grandes proyectos, la ley no garantiza que las medidas mencionadas no se apliquen a territorios de pueblos indígenas.

A pesar de que escuetamente la norma indica que solo se aplicarán a terrenos eriazos del Estado y excluye a las comunidades campesinas y nativas, la amenaza de afectación subsiste debido a que existe un gran número de estas en proceso de reconocimiento o titulación y no existe un registro e información actualizada sobre las tierras comunales. Las organizaciones indígenas consideran que dicha exclusión “no es suficiente para asegurar la protección de los territorios indígenas, teniendo en cuenta la actual situación de indefensión de estos, lo que en la práctica hará difícil el reconocimiento, titularidad o posesión de sus territorios en los plazos cortos propuestos” y podría “generar conflictos territoriales de variada índole”.

Las organizaciones indígenas y las instituciones aliadas de la sociedad civil decidieron enfrentar los paquetazos por la vía constitucional. En abril de 2015 se presentó ante el Tribunal Constitucional (TC) una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 30320, conocida también como el segundo paquetazo. La acción se presentó con el respaldo de más de seis mil firmas

¹ Los paquetazos normativos son: Primer paquetazo (mayo 2013): DS 054-2013-PCM, DS 060-2013-PCM y Ley 30025. Segundo paquetazo (junio 2014): Ley 30230. Tercer paquetazo (enero 2015): DS 001-2015-EM. Cuarto paquetazo (mayo 2015): Ley 30327, Ley de Promoción de las Inversiones para el Crecimiento Económico y el Desarrollo Sostenible. Quinto paquetazo: Decreto Legislativo 1192 y Decreto Legislativo 1210, expedidos al amparo de la Ley 30335, que otorgó facultades legislativas al Poder Ejecutivo para dictar normas en materia económica, financiera y administrativa.

² Red Muqui y Grufides: Paquetes normativos 2013-2015 y su impacto en los derechos fundamentales en el Perú. Manual. Lima, octubre, 2015, p. 13

ciudadanas recolectadas por el Pacto de Unidad de Organizaciones Indígenas del Perú, la organización amazónica AIDSEP, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y organizaciones afiliadas como la Red Muqui, entre otras. Sin embargo, en una actitud insólita, hasta diciembre de 2015 el máximo tribunal ni siquiera admitió a trámite la demanda, lo que deja entrever presiones políticas muy fuertes para impedir la revisión de la Ley 30230.

Para el abogado Juan Carlos Ruiz Molleda la demanda plantea que el TC evalúe si la Ley 30230 respeta la Constitución y los tratados internacionales. Explicó que la citada norma es cuestionada por vulnerar el derecho a la consulta previa, al territorio y a un ambiente equilibrado y adecuado para la vida. “Esta es una ley que no ha sido consultada a pesar de que afecta directamente derechos importantes de los pueblos indígenas, en especial el derecho al territorio. Al no haber sido consultada es una norma que tiene un vicio de ilegalidad”, afirmó.

La enorme deuda de la titulación comunal

La demanda de titulación comunal es una de las principales deudas históricas del Estado peruano que ha venido siendo requerida en escenarios nacionales e internacionales, adquiriendo notoriedad durante el 2015, gracias a la presión de las organizaciones indígenas en diversos espacios y foros climáticos. Esto ha permitido que se creen varios fondos ambientales orientados a la titulación en el Perú^{3,4}.

Sin embargo, cabe destacar la ausencia de voluntad política del Estado peruano para emprender medidas serias de titulación para las comunidades. Una muestra de esto es que “Hoy, 90 años después del reconocimiento de la Comunidad Indígena por la Constitución: no hay cifras oficiales de comunidades, no hay un catastro o mapa oficial de comunidades y no hay una agencia estatal con responsabilidad de sistematizar y actualizar los datos que existen”, indica Richard Smith,

del Instituto del Bien Común (IBC), una de las pocas instituciones que posee un registro georreferenciado de comunidades nativas.

Mientras que el Ministerio de Energía y Minas tiene un sistema de información sobre las 55 000 concesiones mineras, el Estado carece de un sistema de información de comunidades, tarea que debe estar en manos de un ente rector de saneamiento de la propiedad agraria y rural. Según cifras del IBC y de la Campaña Territorios Seguros, en 2015 hay 3303 comunidades campesinas sin título y en el área amazónica 666 comunidades nativas pendientes de titular. También existen 918 comunidades ribereñas pendientes de reconocimiento y titulación.

Uno de los problemas que enfrenta el Estado peruano es eliminar una serie de obstáculos para la titulación comunal de comunidades amazónicas, y que han sido



Los paquetazos ambientales fueron dados con la finalidad de debilitar la vigilancia ambiental y facilitar la exoneración de pagos por infracciones a las empresas.

descritos por Alberto Chirif y Juan Carlos Ruiz Molleda⁵. Del mismo modo, la Defensoría del Pueblo identificó siete problemas generales que limitan la titulación tanto de las comunidades campesinas como nativas.

Hay problemas de fondo en el tema de la titulación como el hecho de que a las comunidades amazónicas se les tittle únicamente el área con aptitud agrícola y ganadera, mientras que el área con aptitud forestal “se les ceda en uso”.

A ello se agrega la demanda de territorialidad, que va más allá de la titulación comunal y que aparece con fuerza en la escena nacional a partir del Gobierno Autónomo de la Nación Wampis, como veremos más adelante.

³ El Banco Interamericano de Desarrollo aprobó en diciembre de 2014 un préstamo por 40 millones de dólares para financiar la tercera etapa del “Proyecto de catastro, titulación y registro de tierras rurales en el Perú-PTRT3”. Se evalúa aumentar 16 millones de dólares dedicados exclusivamente a comunidades nativas con lo que el PTRT 3 titularía 403 comunidades nativas y 228 comunidades campesinas. El Banco Mundial anunció el destino de 7 millones de dólares para titular comunidades nativas en un período de 7 años con el concurso conjunto de los gobiernos regionales, comunidades nativas beneficiarias y organizaciones indígenas. El Banco Mundial aprobó los primeros días de septiembre una donación por 5.5 millones de dólares al Fondo Climático Estratégico para demarcar y titular 130 comunidades indígenas e inscribir otras 310 comunidades de la base de datos de pueblos indígenas del Ministerio de Cultura, entre otras actividades. El Programa Pro Ambiente de GIZ en Perú anunció su compromiso de destinar hasta 3 millones de dólares para la titulación principalmente de comunidades nativas en San Martín y Ucayali.

⁴ Ver reporte: “Titulación: la gran deuda del Estado frente a las comunidades”, en Servindi: <http://www.servindi.org/actualidad/141121>

⁵ Ver artículo: “Estado debe eliminar obstáculos para titular integralmente a las comunidades nativas”, en: <http://www.servindi.org/actualidad/123329>

Consulta previa deficitaria

La Ley de Consulta Previa se promulgó en setiembre del 2011 y entró en vigencia en abril del 2012, con la aprobación de su reglamento el cual no estuvo libre de diversos cuestionamientos por parte de las organizaciones indígenas e instituciones de la sociedad civil⁶. A diciembre de 2015 se registran 22 procesos de consulta iniciados, que versan sobre políticas nacionales, lotes de hidrocarburos, proyectos mineros, proyectos de infraestructura y áreas naturales protegidas. Según el Ministerio de Cultura, 18 procesos del citado total han culminado con acuerdos, “generando beneficios” para más de 20 pueblos indígenas.

En julio de 2015 un informe periodístico⁷ dio a conocer la base de datos de comunidades campesinas, la cual mantuvo oculta el propio Estado por un espacio de casi tres años. Esta base es una referencia para indicar qué comunidades pueden ejercer el derecho a la consulta previa frente a operaciones de las industrias extractivas y otras que afecten sus derechos. Hasta entonces



Los derrames de petróleo son un hecho recurrente mientras no se repare y mantenga el gasoducto que opera alrededor de 40 años.

solo se conocía la base de datos de las comunidades nativas de la selva. El informe demostró que la demora en la publicación de la lista - la cual tenía una versión preliminar conocida por el Ministerio de Energía y Minas - tuvo como fin hacer viables operaciones mineras en territorios de comunidades campesinas sin efectuar procesos de consulta previa.

Cabe precisar que recién el 2015 se iniciaron tres procesos de consulta previa en minería, en las regiones de Ancash, Cusco y Apurímac. No obstante, los cuestionamientos se mantuvieron igual en el sentido de que para el caso de Cusco —proyecto minero Aurora— “no se consultan los impactos del proyecto

minero ni las medidas de prevención y mitigación” al haber sido otorgada antes la certificación ambiental⁸.

A todo ello se suma el desafío de revisar qué se consulta. En el caso de hidrocarburos, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) estableció en el 2012 que se consulta el decreto supremo que aprueba la firma del contrato, y en el caso de minería la resolución directoral que autoriza el inicio de actividades de exploración. Ante esto, la expectativa porque se consulten otras medidas —como los EIA— se mantiene con base en el Convenio N° 169 de la OIT, que sostiene que se deben consultar “medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”.

Un tema adicional en esta materia es la necesidad de que se haga oficial la medida consultada. Del total de consultas realizadas, solo seis han visto su medida publicada en el diario oficial El Peruano. Por citar un caso, se encuentra aún pendiente la publicación del decreto sobre la Política Sectorial de Salud Intercultural cuya consulta culminó el 2014.

La consulta previa de medidas legislativas, que involucra la modificación del Reglamento del Congreso, también ha encontrado una serie de obstáculos. Un proyecto de ley que tuvo el respaldo de la Comisión de Pueblos y de las organizaciones indígenas fue encaretado a fines de año. Al respecto, la Defensoría del Pueblo exhortó a la Comisión de Constitución y Reglamento del Parlamento considerar las recomendaciones efectuadas en un informe elaborado el 2014 por el Programa de Pueblos Indígenas de esta institución⁹.

Asimismo, en octubre el Ministerio de Educación inició el proceso de consulta previa del Plan Nacional de Educación Intercultural Bilingüe con las principales organizaciones indígenas nacionales cuya etapa final culminó en enero de 2016. Es el primer proceso de consulta que culmina con acuerdos de ambas partes y ningún desacuerdo.

Área Costa-Andes

Tía María: agro versus minería

En agosto de 2014 el MEM aprobó el segundo EIA del proyecto cuprífero Tía María, a cargo de Southern Peru Copper Corporation. El primer EIA del proyecto fue anulado el 2011 tras ser cuestionado por organismos como la Oficina de las Naciones Unidas de Servicio para Proyectos (UNOPS). El conflicto por este proyecto, ubicado en la región Arequipa muy cerca del valle

⁶ DAR-CNDDHH: Análisis crítico de la Consulta Previa en el Perú. Informes sobre el proceso de reglamentación de la Ley de Consulta y del Reglamento, Lima, 2012.

⁷ Ojo Público: <http://ojo-publico.com/77/los-secreto-detras-de-la-lista-de-comunidades-indigenas-del-peru>

⁸ Ver nota de CooperAcción: <http://cooperaccion.org.pe/main/advanced-stuff/cooperaccion-informa/440-primera-consulta-previa-en-mineria>

⁹ Ver recomendaciones en: <https://ia801306.us.archive.org/15/items/InformeN0012014DPAMASPPPII2/Informe%20N%C2%B0%20001-2014-DP-AMASPPPI-I%20%282%29.pdf>

agrícola de Tambo, alcanzó su pico más alto en los meses de abril y mayo de 2015, cuando fallecieron tres civiles producto de la represión policial.

El temor principal de la población de los distritos de Cocachacra, Deán Valdivia y Punta de Bombón, que se ubican sobre el valle, es que las operaciones vayan a afectar la agricultura, actividad que emplea a por lo menos 30 mil personas. Y es que el proyecto involucra operaciones sobre dos tajos abiertos: La Tapada y Tía María, el primero ubicado a poca distancia del valle, en un área muy próxima a los centros poblados, canales de irrigación y micro cuencas.

Ante ello, la población exigía que el EIA sea evaluado por un organismo independiente como ocurrió con el primer estudio. Pero el gobierno y la empresa evitaron con cualquier pretexto dicha revisión. En ese marco, salieron a la luz serias observaciones técnicas al segundo EIA y se destaparon hechos como el ocultamiento de la explotación de oro que obligaba al EIA a desarrollar medidas de control para este tipo de actividades.

Otra omisión grave en el estudio es que no precisa cómo aplicarán el cierre de sus operaciones cuando culmine su concesión. En esta etapa la compañía debe precisar cuáles serán sus trabajos de remediación de suelos y aguas residuales. Por el lado del gobierno primaban los calificativos de “ignorantes” y “enemigos del desarrollo” hacia los opositores. El rol que jugó fue determinante para llegar al pico de conflictividad debido a que su supuesta voluntad de diálogo se veía toda vez empañada de mala fe. A través de las fuerzas del orden y con la ayuda de un gran sector de la prensa, buscó “demoler honras y sembrar evidencias” contra inocentes como se descubrió en un escandaloso sembrado de objetos punzocortantes por la policía¹⁰.

Lo cierto es que en la provincia de Ilay, donde se ubica el valle de Tambo, se tendría previsto el desarrollo de diversos proyectos mineros a cargo de una media docena de empresas. Tía María sería el proyecto más importante. No obstante, se trata de un proyecto antitécnico que amenaza la actividad agropecuaria del próspero valle. La Defensoría del Pueblo ha manifestado que este proyecto, de capital mexicano, es socialmente inviable¹¹.

Por otro lado, la minera mantiene en su alta dirección a Óscar González Rocha, para quien un juez el 2013 solicitó dos años y seis meses de pena privativa de la libertad por contaminación del aire y arrojar arsénico al mar de Ilo, en la región Moquegua, al sur de Arequipa. A inicios del 2016, este mismo alto directivo manifestó que no dejará de insistir para que se ejecute Tía María.

Las Bambas: conflictividad latente

Uno de los acontecimientos más importantes del 2015 fue el conflicto suscitado en torno al proyecto cuprífero Las Bambas, en el departamento de Apurímac, el cual tiene previsto extraer 6,9 millones de toneladas de



La falta de voluntad política para atender y cumplir los acuerdos con las comunidades indígenas es uno de las causas de la desconfianza y la conflictividad socio-ambiental.

cobre a un promedio de 450 mil toneladas anuales de cobre. El proyecto está a cargo de la empresa china MMG Limited que en abril de 2014 compró el proyecto por US\$ 7 mil millones a Glencore-Xstrata.

El problema surge cuando MMG Limited realiza modificaciones al proyecto hasta en cinco ocasiones en menos de 20 meses. Según un informe especial del Observatorio de Conflictos Mineros, el estudio de impacto ambiental fue modificado en dos ocasiones, y en tres ocasiones más se utilizó el instrumento denominado Informe Técnico Sustentatorio, un procedimiento creado por el primer paquetazo normativo (DS 054-2013-PCM), que permite aprobar cambios de manera expeditiva en quince días y sin mecanismos de participación ciudadana.

Las modificaciones al proyecto sin consulta a la población desencadenaron una crisis y un conflicto abierto en setiembre del 2015 que ocasionó la muerte de tres personas y varios heridos. Uno de los principales cuestionamientos es la instalación de una planta de molibdeno, considerada altamente contaminante, y que originalmente se instalaría en la provincia cusqueña de Espinar, adonde se llevarían los minerales a través de un mineroducto. Con la modificación, el mineral se trasladaría por carreteras que cruzan territorios comunales.

Las comunidades campesinas exigieron que se consulten las modificaciones del proyecto y se incluyan como zona de influencia a las ubicadas dentro de la Línea de Transmisión Eléctrica (Grau) y la Vía de Transporte de Carga Pesada de los distritos de Challhuahuacho, Mara y Ccapacmarca. El año culminó con una evidente frustración de las comunidades que

¹⁰ Ver Servindi: <http://www.servindi.org/actualidad/129063>

¹¹ Ver diario La República: <http://larepublica.pe/politica/713600-defensoria-del-pueblo-tia-maria-es-socialmente-inviable>

esperaban la instalación de una mesa de diálogo en torno al proyecto minero Las Bambas luego de dos convocatorias suspendidas por la Presidencia del Consejo de Ministros que no hacen sino prolongar el conflicto y las posibilidades de que se desencadenen nuevas acciones de protesta.

Área Amazonía

Gobierno territorial Wampis

Sin duda uno de los acontecimientos del año es la conformación del primer gobierno autónomo indígena del Perú: el Gobierno de la Nación Wampis. El hecho ocurrió el 29 de noviembre en la comunidad Soledad, en la cuenca del río Santiago, donde 300 representantes de 85 comunidades de la etnia wampis eligieron su primer gobierno, aprobaron su estatuto constitutivo como marco normativo y emitieron su primera ordenanza como acto de gobierno. Para Wrays Pérez Ramírez, electo como primer pamuk o presidente del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis, es una "decisión histórica" destinada a proteger la Amazonía peruana para enfrentar el cambio climático. El Gobierno Wampis defiende la totalidad de su territorio ancestral que comprende 1.3 millones de hectáreas de bosques tropicales.

Andrés Noningo Sesen, uno de los waimaku o visionarios wampis, explicó que han tomado esta decisión: "en parte como una estrategia de defensa territorial; como respuesta a los esfuerzos de dividirnos por comunidades (...) Aún seremos ciudadanos peruanos, pero esta unidad nos dará la fuerza política que necesitamos para explicar nuestra visión al mundo y a los estados y empresas que solamente ven el oro y el petróleo en nuestros ríos y bosques". "Tampoco ven a los seres espirituales como Nunkui, la madre de la tierra y Tsunki que cuidan nuestras tierras y aguas"¹².

Perspectivas

Elecciones generales: ¿más de lo mismo?

El 2015 la actividad petrolera no ha dejado de ser un peligro para los pueblos y comunidades indígenas. Y no precisamente por el número de derrames producidos para el caso de la Amazonía –menor este año a diferencia de otros– sino por las consecuencias, muchas veces, irreparables que genera. A esto se suma la ausencia de un Estado fuerte que haga cumplir las leyes ambientales y la vigencia de normas que restan carácter sancionador a importantes oficinas del Estado como el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental.

Por citar un caso, el 29 de agosto la empresa de origen argentino Pluspetrol abandonó sus operaciones en el Lote 192 (ex IAB) por vencimiento de contrato, con lo que se dio paso –sin una adecuada consulta previa de por medio– al ingreso de la canadiense Pacific Stratus Energy por dos años. La falta de diálogo y concertación entre Estado y pueblos indígenas es una realidad que tiene graves consecuencias en diversos ámbitos como la deforestación, los estragos que provoca la minería (la formal como la informal e ilegal), la tala ilegal y otras actividades que desbordan la débil capacidad del Estado peruano.

En ese marco, y a pocos meses de que se lleven a cabo las elecciones presidenciales, los planes de gobierno de los candidatos en materia ambiental y sobre los recursos naturales renovables, en su mayoría, carecen de medidas adecuadas para enfrentar la situación. Para el experto Marc Dourojeanni, estos planes son "desbalanceados, inconsistentes, incompletos y, en especial, no explican cómo van a cumplir con cada uno de los puntos que proponen"¹³. Esto, por ejemplo, en el tema de reforestación en selva y sierra, sobre el cual las agrupaciones políticas plantean objetivos bastante ambiciosos. No obstante, el experto reconoce cierta conciencia en la clase política sobre lo que se necesita hacer en materia ambiental, aunque sus propuestas no tengan el peso necesario que lleve a creer en "un desarrollo verdaderamente sostenible".

Por su parte, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), en cuanto al tema de la gestión de bosques sostiene que "pocos candidatos delinean el valor del Sistema de Áreas Naturales Protegidas como elemento fundamental para el desarrollo del país en temas como: turismo, investigación científica, identidad, cultura". Otro punto importante que muestra la SPDA es la carencia de propuestas específicas en temas de corrupción, así como la presencia del Estado en todo el territorio o el tráfico ilegal de la fauna silvestre.

Cabe precisar que los bosques en el Perú representan el 57,3 por ciento del territorio nacional –73'280,424 hectáreas–. Según el Ministerio del Ambiente son tres las principales causas directas de la deforestación: la expansión agropecuaria, las actividades ilegales e informales como la tala, minería y cultivo de coca, y la expansión de la infraestructura de comunicación e industrias extractivas.

Informe elaborado por Jorge Agurto, miembro fundador y director de la asociación Servicios en Comunicación Intercultural Servindi (www.servindi.org) con la colaboración de Jonathan Hurtado Mariño.

¹² "Pueblo Wampis conforma primer gobierno autónomo indígena del Perú". Ver en: <http://www.servindi.org/actualidad/144577>

¹³ Actualidad ambiental, portal informativo de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA): <http://www.actualidadambiental.pe/?p=35159>

El Derecho Territorial de los Pueblos y Comunidades Indígenas

El 11 de julio de 2015 falleció Pedro García Hierro, el entrañable “Perico”, abogado, amigo, compañero y maestro del movimiento indígena a quién supo guiar en la larga lucha por la reivindicación de sus derechos colectivos.

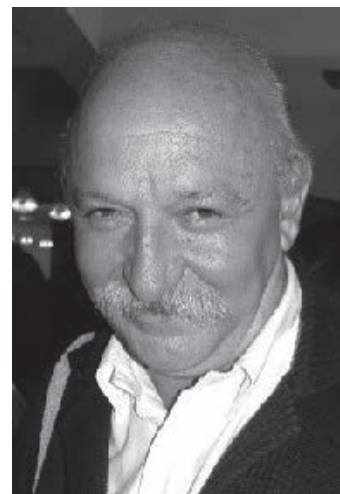
A manera de homenaje Servindi ha editado una cartilla ilustrada que busca difundir ideas esenciales sobre los estándares internacionales sobre tierras y territorios en base a un texto de Perico.

La publicación ha sido ilustrada por el artista shipibo Robert Rengifo, Chonomëni. “el que pinta bonito” y elaborada por el historiador Carlos Rojas Fera.

Las comunidades y organizaciones indígenas y proindígenas que desean obtener un ejemplar pueden solicitarlo y recogerlo en nuestra sede ubicada en: Calle Guillermo Perata 185, Urb. Chama, Surco. Teléfono: 2720-290. La distribución es gratuita.

Los que deseen descargarla en formato PDF pueden hacerlo desde la siguiente dirección:

https://ia601507.us.archive.org/30/items/CARTILLAPERICO/CARTILLA_PERICO.pdf



Servindi anuncia su alianza con Intimedia para ofrecer a las comunidades y organizaciones indígenas de Perú la posibilidad de tener su propio sitio web y puedan dar a conocer su cultura e identidad al mundo.

El servicio consiste en una web administrable preparada para mostrar la información en español y en tu lengua originaria.

Además, tendrás una página en Facebook, acceso a estadísticas, elegir el dominio .com, .org o .net, diseño para tabletas y celulares, Twitter e Instagram, diez correos institucionales y hosting.

Para mayor información: ingresa a la dirección web: www.intimedia.net/servindi
escribe al correo: contacto@intimedia.net / comunícate al teléfono: 01-252-3830

La COMUNICACIÓN antes de COLÓN



Uno de los libros más valiosos para la comprensión de la comunicación indígena es sin duda *La Comunicación antes de Colón*. Tipos y formas en Mesoamérica y los Andes. La obra fue elaborada por un equipo liderado por el maestro Luis Ramiro Beltrán (Bolivia); e integrado además por Karina Herrera, Esperanza Pinto y Erick Torrico.

El documento tiene el valioso mérito de rebatir algunas visiones coloniales que han menospreciado el aporte de los pueblos prehispánicos, considerados como “ágrafos” y condenados hasta no hace mucho a los confines de la prehistoria. Y esto es así porque han partido del alfabeto y sobrevalorado los avances tecnológicos para registrarlo dando un peso considerable a la imprenta.

En consecuencia, la tendencia predominante ha sido negar la existencia de escrituras alternativas, y optar por un “exclusivismo logocéntrico” que reconoce como única escritura la alfabética. Uno de los aportes

de la “Comunicación antes de Colón” es afirmar la comunicación “como hecho humano y social, que se desarrolló antes y al margen de las tecnologías que multiplican su alcance o favorecen su conservación” y que a lo largo del desenvolvimiento de las culturas hubo diferentes modos de registro y transmisión de datos y mensajes de una riqueza extraordinaria aún por explorar.

El volumen de 314 páginas fue publicado por el Centro Interdisciplinario de Estudios de la Comunicación (CIBEC) en octubre de 2008 en esta ocasión compartimos algunos fragmentos e ideas esenciales del libro.

Funciones personales y sociales de la comunicación

- **Expresión:** Exteriorización individual de una idea o un sentimiento.
- **Interacción/intercambio:** Relación entre uno o más miembros de uno o más grupos sociales que puede implicar un flujo comunicacional de ida y vuelta, no necesariamente dialógico, ni horizontal.
- **Registro/documentación:** Conservación de información mediante un sistema de notación y, eventualmente, de clasificación.
- **Información:** Producción de datos sobre personas, hechos o conceptos que pueden ser distribuidos a un número limitado o amplio de destinatarios.
- **Propaganda:** Información interesada que tiende a presentar positiva o negativamente determinada información con el propósito de persuadir a sus destinatarios en un cierto sentido.
- **Enseñanza:** Instrucción de quienes no saben en algún dominio del conocimiento.
- **Conmemoración/regocijo:** Celebración recordatorio de algún acontecimiento importante que puede tener carácter festivo.
- **Ritualidad:** Celebración de alguna ceremonia religiosa, política e inclusive social en sujeción a ciertas creencias, costumbres y reglas culturalmente aceptadas.
- **Regulación:** Establecimiento formal de normas que rijan los comportamientos de los miembros de una colectividad y los mantengan dentro de los límites requeridos para la convivencia y la preservación de la institucionalidad.

Todas esas funciones corresponden a actividades básicas de la vida individual y grupal que incluye una gran diversidad de formas de comunicación con sus respectivos lenguajes y recursos. La presencia de ellas en la cotidianidad de las sociedades precolombinas fue evidente, hecho que reafirma la certeza que permea el presente trabajo acerca de la existencia y desarrollo de varios modos comunicacionales en esos pueblos (página 39).



Tipos y formas comunicacionales en Mesoamérica prehispánica

A continuación, y de manera no exhaustiva ni definitiva, más bien con carácter inicial y exploratorio, se propone aquí una tipología de la comunicación mesoamericana prehispánica y de sus respectivas formas. El siguiente cuadro resume esta tentativa:

Tipos comunicacionales	Formas de expresión
Comunicación oral	<ul style="list-style-type: none">• Cuicatl (poemas/cantos/himnos)• Tlahtolli (palabra, relato, discursos, relación)• Relatos
Comunicación gesto-espacial-sonora (acompañamiento a lo oral)	<ul style="list-style-type: none">• Fiestas, danzas-música• Rituales• Teatro
Comunicación iconográfica y escrita	<ul style="list-style-type: none">• Pintura, muralismo, cerámica, orfebrería, platería, plumaria, tallados.• Escritura en piedra, ceramios, estelas, lápidas y otros.• Libros mesoamericanos (códice o amoxtlí).
Comunicación espacio-monumental	<ul style="list-style-type: none">• Ciudades• Templos, plazas• Estelas y frisos• Edificios de administración y enseñanza
	Otras formas: <ul style="list-style-type: none">• Vestimenta• Mensajería prehispánica

Acerca de qué actores, usos y funciones fueron preferenciales de estos tipos y estas formas de comunicación en Mesoamérica y en los Andes prehispánicos:

En términos generales, se puede entender la producción simbólica precolombina como el desarrollo y la utilización de múltiples lenguajes, sujetos a diversas reglas de codificación y que no pueden ser restringidos apenas a la palabra ni a su sola representación alfabética. A ello se suma la variedad de funciones sociales descritas asignadas a los usos simbólicos, buena parte de las cuales, como se acaba de señalar, estaba ya presente en las culturas prehispánicas: narrar, celebrar, registrar, informar, guardar y reproducir las tradiciones, adorar, legitimar, expresar sentimientos, recordar o enseñar, entre otras principales.

Los pueblos precolombinos manejaron distintos códigos de simbolización-de dónde emergen los tipos y las formas de la clasificación propuesta en este estudio- que le sirvieron para atender las necesidades de comunicación correspondientes a los diferentes planos de la vida social, desde los cotidianos y de la gestión gubernamental hasta aquellos destinados a establecer vínculos entre los hombres y las deidades en que crean.

La investigación reconoció cuatro grandes modalidades de comunicación:

- Hombres-naturaleza.
- Hombres-dioses.
- Élite-pueblo.
- Hombre-hombre.

En esa misma dirección, como se dijo antes, identificó variados usos de la comunicación: rituales, artísticos, político-administrativos, educativos, festivos, para las relaciones interpersonales o para las relaciones amorosas.

Más allá de registrar y detallar la existencia, en este último caso, de una rica diversidad de opciones (palabra, música, teatro, danza, iconografía, etc.), junto a los instrumentos tanto como a los géneros y subgéneros que les sirvieron para manifestarse, el estudio puso de relieve el hecho central de que en América precolombina hubo un desarrollo fundamental de la escritura mucho tiempo antes de que los conquistadores trajesen el alfabeto español. (Páginas 298-299).

¡Gloria al maestro!



El maestro del periodismo y la comunicación Luis Ramiro Beltrán nació en la ciudad de Oruro, Bolivia, en 1930 y falleció el 11 de julio de 2015 a los 85 años de edad, después de 70 años de ardua labor comunicativa.

Desde muy joven inició su carrera en el periodismo y recorrió diferentes medios, sobre todo escritos, llegando incluso a fundar sus propios medios: el semanario humorístico Momento y la estación de radio El Cóndor.

Además de realizarse como un curtido periodista incursionó en el campo de las teorías de la comunicación. A Luis Ramiro Beltrán se le reconoce como uno de los fundadores de la Escuela Crítica Latinoamericana, la cual establece un nuevo paradigma de la comunicación.

Este modelo toma como raíz el análisis de la constitución de los medios en torno a su marco cultural y enfoca la crítica sobre la relevancia de los procesos políticos y económicos que configuran los movimientos populares.

El aporte de Luis Ramiro conllevó al debate por la democratización de los medios de comunicación y obtuvo diversos reconocimientos internacionales como el Premio McLuhan-Teleglobe, en Canadá, un premio mundial de comunicación otorgado a los más notorios teóricos en éste ámbito.

En 1997 recibió el Premio Nacional de Periodismo de Bolivia y el 2007 un premio de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación (ALAI) por su labor en investigación.

Uno de sus últimos reconocimientos fue la Medalla “Orden Parlamentaria al Mérito Democrático Marcelo Quiroga Santa Cruz” por haber sabido conjugar los valores democráticos con la esencia misma del proceso comunicativo, la que no se puede entender fuera de espacios de diálogo democrático, inclusivo y participativo.

Hacia una definición humana y democrática de comunicación

«La comunicación es el proceso de interacción social democrática que se basa sobre el intercambio de símbolos por los cuales los seres humanos comparten voluntariamente sus experiencias bajo condiciones de acceso libre e igualitario, diálogo y participación.»

Todos tienen el derecho a comunicarse con el fin de satisfacer sus necesidades de comunicación por medio del goce de los recursos de la comunicación. Los seres humanos se comunican con múltiples propósitos. El principal no es el ejercicio de influencia sobre el comportamiento de los demás”

Luis Ramiro Beltrán: “Adiós a Aristóteles: La comunicación Horizontal”, 1979.
Accesible en <http://www.rebelion.org/docs/54654.pdf>

Iniciativas para un desarrollo sostenible de la Amazonía

Por Cristina Sánchez

Desde hace varios años, diversas instituciones nacionales e internacionales han unido fuerzas para conservar los bosques de la Amazonía peruana a través de un enfoque de desarrollo sostenible. A partir de esto, diversos conceptos como el de DCI, REDD+ y RIA suenan en varios espacios e iniciativas. Pero, ¿qué significan realmente? A continuación revisaremos estos tres conceptos, con el objetivo de conocer un poco más lo que se le viene al país en lo que respecta a la región Amazónica.

La DCI

La Declaración Conjunta de Intención (DCI) es un documento que se firmó el 24 de noviembre de 2014 en la Semana del Clima celebrada en Nueva York. A través de este documento, Noruega, Alemania y Perú se comprometieron en luchar contra el cambio climático aplicando el enfoque de desarrollo sostenible en los sectores agrícolas, forestales, y la minería ambientalmente adecuada en el Perú. El desarrollo de la DCI se ha planificado en las siguientes 3 fases:

Fase I: PREPARACIÓN

Medir niveles de deforestación y de emisores forestales, diseñar instrumentos de financiamiento y de ley forestal y de fauna silvestre.

Fase II: TRANSFORMACIÓN

Cesar autorizaciones de conversión de tierras, reducir áreas sin anignación legal, titular 5 millones de ha. 2 millones de ha conservadas por CC.NN, evaluar impacto de actividades en la Amazonía e implementar proyectos de Plan de Inversión Forestal.

Fase III: Contribución por reducción de emisores

Contribuciones económicas por sistemas de sañvaguadas y reportar como estos son atendidos y respetados.

El principal objetivo del DCI es contribuir a reducir significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), causantes del calentamiento global, en el Perú. En lo que respecta al financiamiento, Noruega donará 300 millones de USD, pudiendo ser utilizados solo 50 millones de USD durante la fase I y 2. De esta forma, queda establecido que el resto, 250 millones de USD, serán para la fase 3 que representan el pago por los resultados de la reducción verificada de emisiones de GEI.



Actualmente la DCI se encuentra en la segunda fase, la de transformación. Si bien ya se han realizado algunas actividades, el Gobierno peruano, a través del Programa Bosques, aún se encuentra diseñando esta fase incluyendo las sugerencias de los distintos grupos de interés. La tercera fase, la de contribuciones por reducción verificadas de emisiones, estaría enmarcada en el concepto de REDD+, que revisaremos a continuación.

■ REDD+

La primera vez que se empezó a mencionar el concepto de REDD+ en el Perú fue en el 2011, cuando se aprueba el Plan Nacional de preparación de este enfoque. Es en este momento que se empieza a contemplar que algunos sectores ven que su aplicación en el Perú podría ser beneficiosa para la conservación de los bosques amazónicos. Después de diversos estudios de suelo y sociales su aplicación empezó a tomar forma con la firma de la DCI. A pesar de esto, cabe resaltar que REDD+ aún está en un proceso de construcción en el mundo y es motivo de controversias y de críticas.

REDD+ es uno de los enfoques para enfrentar la mitigación climática, que tal como lo dicen sus siglas, busca reducir las emisiones de carbono causada por la deforestación y degradación de los bosques. Se le agregó el “+” o “plus” por el enfoque de conservación que debe caracterizarlo.

El objetivo de REDD+ es compensar con dinero las emisiones de dióxido de carbono (CO₂) que se emiten en el bosque a través de bonos de carbono que serían financiados por los países que necesitan reducir sus emisiones. De esta forma, se le otorgaría un beneficio económico a quienes conservan los bosques y realizan prácticas sustentables. El mecanismo requiere calcular la cantidad de carbono que un territorio contiene de manera específica, luego calcular el impacto de las emisiones de carbono que ocasionarían actividades de deforestación y degradación, y finalmente valorizar el aporte económico por la conservación de la emisión evitada mediante la protección de los bosques.

A pesar de lo beneficioso que suena una iniciativa como REDD+, se han identificado riesgos y falencias. Por este motivo, en la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático o COP 16, desarrollada en Cancún, México, el 2010, se aprobaron las denominadas salvaguardas de Cancún.

Las salvaguardas son políticas y procedimientos que buscan evitar los daños sociales, de gobernanza o ambientales durante la preparación e implementación de REDD+. A continuación revisaremos las cinco principales salvaguardas que necesitan ser aplicadas en el contexto peruano:

La complementariedad o compatibilidad de las medidas con los objetivos de los programas forestales nacionales y de las convenciones y los acuerdos internacionales sobre la materia.

La transparencia y eficacia de las estructuras de gobernanza forestal nacional, teniendo en cuenta la legislación y la soberanía nacional.

El respeto de los conocimientos y derechos de los pueblos indígenas y los miembros de las comunidades locales.

La participación plena y efectiva de las partes interesadas, en particular la de los pueblos indígenas y las comunidades locales, en acciones de REDD+.

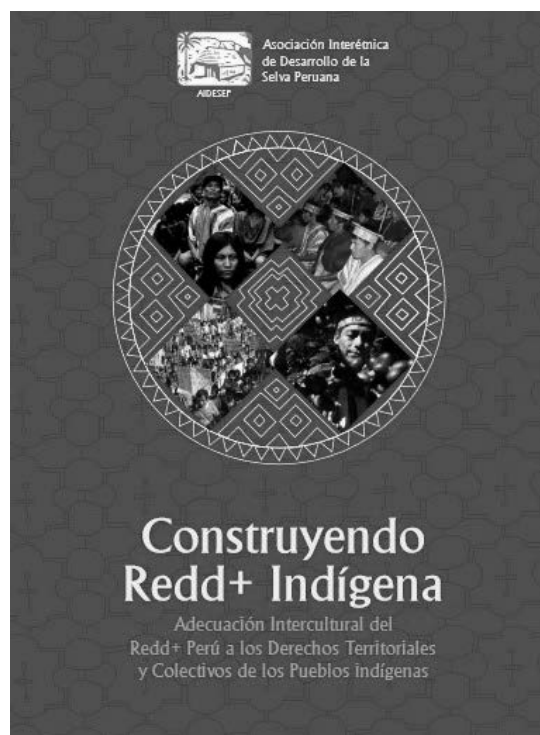
La compatibilidad de las medidas con la conservación de los bosques naturales y la diversidad biológica.

Por su parte, las organizaciones indígenas han desarrollado una propuesta que lleva la denominación de REDD+ Indígena Amazónica (RIA) para reducir las emisiones de GEI, pero desde la perspectiva de los pueblos indígenas y no tanto del mercado o de los países industrializados. Esta propuesta es liderada por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), quienes también coinciden en reducir las emisiones de GEI, pero sin mercantilizar los bosques a través de los bonos de carbono.

Lo que propone RIA es ver al bosque de una forma integral u holística, como un territorio integral que brinda diversos servicios ecosistémicos a la humanidad. De esta forma, busca que se reconozca y compense el valor del bosque de manera integral y no solo por su función de captura de carbono. Desde esta perspectiva también se plantea valorar los distintos planes de vida colectiva de las comunidades y pueblos que lo habitan y que lo protegen. Entre los principales ejes de RIA se encuentra así la titulación territorial indígena, el manejo forestal comunitario y la gobernanza forestal comunitaria.

Después de diversas reuniones de discusión entre AIDESEP y el Ministerio del Ambiente (MINAM), las organizaciones indígenas han logrado incluir la propuesta de RIA oficialmente por el MINAM y la cooperación internacional, en diversos planes y estrategias nacionales. Asimismo, ONU-REDD y la cooperación alemana mediante su agencia GIZ han desarrollado estudios y actividades con AIDESEP para desarrollar RIA. A esta iniciativa se ha sumado también USAID a través del programa ICAA. El documento DCI también considera la propuesta de RIA como uno de sus componentes de cooperación.

Finalmente, cabe resaltar que en las anteriores Conferencias de las Partes (COP) hubo grandes avances en lo que respecta a acuerdos de apertura a enfoques alternativos o innovadores de REDD+. Por esto, es necesario que se siga conociendo y debatiendo todo lo concerniente a esta propuesta, con el fin de que la voz de los pueblos indígenas sea tomada en cuenta y se respeten sus derechos colectivos con los estándares más elevados de protección, asegurando su participación y su consentimiento previo libre e informado como el propio documento de la DCI lo contempla.



Importante publicación de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) que junto con otros materiales puede ser descargada y consultada desde la dirección web: <http://www.aidesep.org.pe/redd-indigena-amazonico-ria-hacia-la-cop20-avanza-la-propuesta-de-aidesep-y-coica/>

Conflictos socioambientales: lo que debemos saber

El conflicto social debe ser entendido como un proceso complejo en el cual sectores de la sociedad, el Estado y las empresas perciben que sus objetivos, intereses, valores o necesidades son contradictorios y esa contradicción puede derivar en violencia.

El conflicto es inherente a la vida. Es una característica natural e inevitable de la existencia humana y de la interacción social.

Conflicto y violencia NO son lo mismo. La violencia es la manifestación destructiva del conflicto social.

Actores en los conflictos sociales

Actores primarios	Actores secundarios	Actores terciarios
Aquellos que participan directamente en el conflicto	Pueden ser grupos que apoyan a alguna de las partes, instituciones, organizaciones de la sociedad o personas vinculadas indirectamente al conflicto	Personas u organizaciones que por sus características pueden tener incidencia en el curso del conflicto

Estado de los conflictos

Conflicto activo	Conflicto latente	Conflicto resuelto
Es el conflicto social expresado por alguna de las partes o por terceros a través de demandas públicas, formales o informales	Es el conflicto social no expresado públicamente. Permanece oculto, silencioso o inactivo, en el que se puede observar la concurrencia de factores que tienen un curso de colisión pero que no se manifiestan o habiéndose manifestado han dejado de hacerlo durante un tiempo considerable	Es el conflicto social cuya solución aceptada por las partes, mediante acuerdos, normas, resoluciones, dan por concluida la disputa

Fase de los conflictos sociales activos

Son los momentos por los que puede pasar un conflicto social activo en función al incremento o disminución de la violencia y las posibilidades de diálogo y entendimiento.



Conflicto socioambiental:

Es un tipo de conflicto social cuya dinámica gira en torno al control, uso y/o acceso al ambiente y sus recursos. Están presentes también componentes políticos, económicos, sociales y culturales.

Fuente: Defensoría del Pueblo:

Sobre la cobertura periodística de conflictos socioambientales

Sandro Macassi* destaca que el conflicto no se inicia cuando se anuncia una confrontación o una de las partes anuncia una acción de fuerza. No todo conflicto llega necesariamente a una etapa de confrontación. Por esta razón una de las tareas importantes de los periodistas es ir más allá de los hechos visibles y conocer con mayor profundidad los conflictos socioambientales.

Macassi representa gráficamente los niveles de cobertura periodística en un témpano o bloque de hielo en el mar (iceberg) como podemos ver a continuación:



Nivel superficial de la cobertura periodística:

muestra solo lo visible del conflicto:

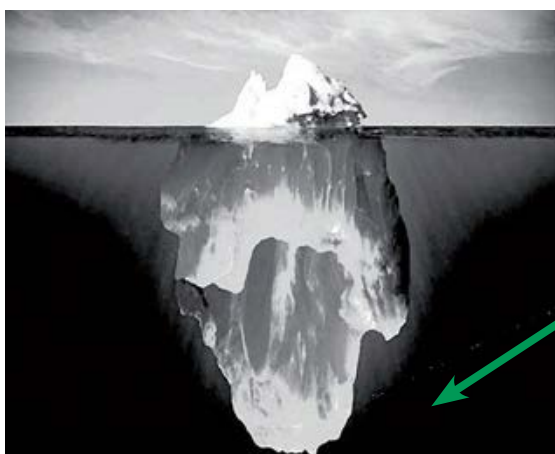
- Marchas de protesta
- Toma de locales
- Obstrucción de carreteras



Nivel intermedio de la cobertura periodística:

muestra un poco más:

- Las posiciones de los actores
- Los intereses o motivaciones
- Las necesidades

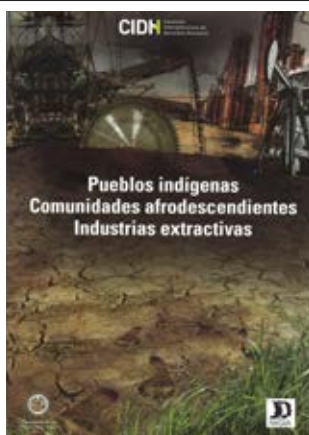


Nivel profundo de la cobertura periodística:

muestra:

- lo no visible del conflicto
- Las problemáticas
- Las causas primarias o estructurales

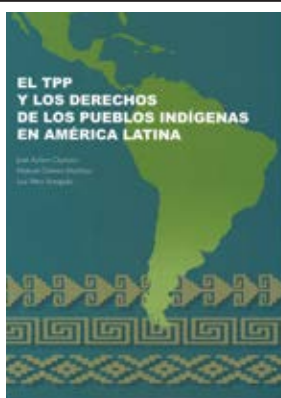
(*) Macassi Lavander, Sandro: Manual Cobertura periodística de conflictos socioambientales. Un enfoque desde la gestión y transformación de conflictos. Comunicaciones Aliadas, Lima, abril de 2013. Disponible para descarga en formato PDF desde la dirección web: <http://www.noticiasaliadas.org/manuales/manual-cobertura-periodistica.pdf>



Pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes e industrias extractivas

La publicación contiene un valioso documento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) titulado: Pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y recursos naturales: protección de derechos humanos en el contexto de actividades de extracción, explotación y desarrollo. El texto corresponde a un informe presentado a la Organización de Estados Americanos (OEA) el 31 de diciembre de 2015 y se refiere a las obligaciones de los Estados respecto de empresas que afectan los derechos de los pueblos indígenas así como las comunidades afrodescendientes.

Autor: CIDH / Edita: IWGIA / Fecha: Diciembre de 2015 / Páginas: 190



El TPP y los derechos de los pueblos indígenas en América Latina

La publicación tiene por objeto aportar antecedentes sobre el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP, por su sigla en inglés) y sus implicancias para los derechos humanos, con particular énfasis en los derechos de los pueblos indígenas en los países suscriptores y, en especial, en los casos de Chile, México y Perú.

Autores: José Aylwin Oyarzún, Manuel Gómez Martínez, Luis Vittor Arzapalo e IWGIA. / Edita: IWGIA / Producción editorial: Alejandro Parellada
Fecha: Junio 2016 / Páginas: 89



Apus, caciques y presidentes. Estado y política indígena amazónica en los países andinos

El libro reúne trece artículos sobre la compleja relación entre el movimiento indígena amazónico en los países andinos de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú y sus respectivos Estados, y que inicialmente fueron reunidos por Jean-Pierre Chaumanil, promotor del grupo internacional "Antropología Política Contemporánea en la Amazonía Occidental (APOCAMO).

Editores: Alexandre Surrallés, Oscar Espinoza y David Jabin Edita: IWGIA, IFEA y PUCP
Producción editorial: Alejandro Parellada / Fecha: Marzo de 2016 / Páginas: 273



Querido Perico. Pedro García Hierro, defensor de los derechos de los pueblos indígenas en los países andinos

Invalorable libro de homenaje a Perico, el personaje que más ha destacado como asesor jurídico en la defensa de los derechos territoriales de los pueblos indígenas reúne 36 artículos escritos por diversas personas que lo conocieron su vida y aprecian su enorme labor. Incluye los testimonios del Grupo Desarrollo del Alto Maraón (DAM), jóvenes que llegaron al Perú en 1971 –incluido Perico– para trabajar con las comunidades aguarunas en diversos campos.

Editor: Alberto Chirif / Edita: IWGIA / Producción editorial: Alejandro Parellada
Fecha: Diciembre de 2015 / Páginas: 332

La presente publicación ha sido elaborada con el auspicio de:

